

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)*

Cortes del Mundo



Vietnam, Suprema Corte Popular

Naciones Unidas/México (Noticias ONU):

- **El aborto no debería ser un delito en el estado mexicano de Veracruz, sino un tema de salud.** Varias entidades de Naciones Unidas piden al congreso de ese estado mexicano que

legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo. La Oficina del Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, ONU Mujeres y el Fondo de Población han aplaudido la sentencia emitida por un juez mexicano que obliga al Congreso del estado de Veracruz a reformar varios artículos del Código Penal que penalizan el aborto como delito. El 13 de diciembre de 2017, se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que ordena al Poder Legislativo a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes del 31 de julio de 2018. Sin embargo, el Congreso aún no ha llevado a cabo los cambios para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal. La sentencia establece que la omisión del Congreso ha significado una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como un atentado a su dignidad, a su derecho a no ser discriminadas y al desarrollo de su personalidad. Las entidades de Naciones Unidas reconocieron un avance en la lucha gracias al Poder Judicial de la Federación, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos. “ONU-Derechos Humanos,

ONU Mujeres y el Fondo de Población llaman al estado de Veracruz a cumplir con prontitud y a cabalidad con la sentencia y ofrecen la asistencia técnica que fuera pertinente”, expresaron en un comunicado publicado el lunes. El pasado 6 de julio, México fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, revisión de la cual se derivarán recomendaciones al Estado para garantizar en todo el país el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en relación con los derechos de las mujeres.

OEA (Corte IDH):

- **El Presidente de la República de Costa Rica y el Secretario General de Naciones Unidas visitarán la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del “40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.** El próximo lunes 16 de julio de 2018 el Excmo. Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica y el Excmo. Sr. António Guterres, Secretario General de Naciones

Unidas, visitarán la sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), donde mantendrán una reunión con el Pleno de dicha Corte. Posteriormente, el Presidente de la Corte IDH, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, inaugurará junto con el Presidente de la República de Costa Rica y el Secretario General de Naciones Unidas la semana de eventos que se celebrarán en conmemoración del “40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El acto de inauguración, el cual además contará con una conferencia magistral del Secretario General de Naciones Unidas, se transmitirá en vivo y podrá ser seguido a través de la página web de la Corte IDH <http://www.corteidh.or.cr/> a partir de las 18:00 (GMT-6). En el marco de dichos eventos, la Corte IDH mantendrá el día 17 de julio una reunión de trabajo de carácter privado con los más altos representantes de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que además intervendrán académicos de amplia y reconocida trayectoria profesional,

todo ello con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación entre los tres tribunales regionales de derechos humanos así como reflexionar sobre los éxitos y desafíos presentes y futuros de los sistemas regionales de derechos humanos. Además, los días 18 y 19 de julio la Corte IDH llevará a cabo un seminario internacional de carácter público que contará con la participación de representantes de las tres cortes regionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los ex-presidentes de la Corte IDH, así como de representantes de las más altas instituciones judiciales, académicas y civiles de diversas partes del mundo. La inauguración del referido seminario tendrá lugar el 18 de julio a las 09:00 horas (GMT-6) en el Teatro Nacional de Costa Rica y contará con la participación del Presidente de la República de Costa Rica, el Exmo. Sr. Carlos Alvarado Quesada. En el siguiente enlace podrá ver un programa detallado de los eventos: **<http://www.corteidh.or.cr/tablas/40aniversario/agenda.html>** Se recuerda que la asistencia a los eventos del 18 y 19 de julio requiere la debida inscripción previa, la cual podrá realizar en los siguientes enlaces: • 18 de julio:

<http://www.corteidh.or.cr/40aniversario/miercoles18.html> • 19 de julio: <http://www.corteidh.or.cr/40aniversario/jueves19.html> De igual manera, podrá seguir la transmisión en vivo de los mencionados eventos del 18 y 19 de julio a través de la página web de la Corte IDH, <http://www.corteidh.or.cr/> **** El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana <http://corteidh.or.cr/index.cfm> o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Marta Cabrera a prensa@corteidh.or.cr Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. También puede seguir las actividades de la Corte en Facebook y Twitter.

Colombia (El Tiempo/Bluradio):

- **Irrespeto de empleados públicos fuera de la oficina es sancionable.** El Consejo de Estado mantuvo una sanción disciplinaria que la

Contraloría General le impuso en el 2008 al funcionario Javier Francisco Barreto por agredir a una de sus compañeras de trabajo en un horario no laboral. El funcionario interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para intentar tumbar la sanción que lo sacó de sus labores por un mes, y en la que solicitó que se condenara a la Contraloría por la suspensión. El trabajador dijo que se debía tumbar la medida ya que, a su juicio, las faltas disciplinarias deben estar directamente relacionadas con el ejercicio de funciones públicas. Agregó que los hechos sucedieron a las tres de la mañana en vía pública, cuando se encontraba de permiso, por lo que no se afectó el deber funcional ni su trabajo. En el expediente se cuenta que los hechos sucedieron en agosto del 2007, cuando empleados de la Contraloría se desplazaban en un bus para participar de una actividad cultural del organismo. Barreto tuvo un altercado con su excompañera sentimental, momento en el que otra funcionaria de la Contraloría intervino. Según el expediente, la servidora pública recibió un golpe. La decisión fue revisada por el consejero ponente William Hernández Gómez, de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

quien consideró que el funcionario violó el deber de todos los trabajadores públicos de tratar con respeto a sus compañeros, y de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia, obligación que se enfatiza aún más cuando se trata de empleados estatales. El Consejo aseguró que el hecho de que la agresión no hubiera ocurrido en horario laboral o en la sede de la Contraloría no implica que no sea un acto disciplinable, pues al tratarse de un hecho contra una funcionaria de la misma entidad en la que trabajaba “deteriora las relaciones interpersonales en el interior de la entidad, afectando por lo tanto el servicio público, la prestación de las labores que tiene a su cargo e incluso los deberes funcionales que debe acatar”. En el proceso, la Contraloría pidió mantener la sanción afirmando que la jurisprudencia ha dicho que se pueden imponer estas medidas a los servidores “en razón a que por tener dicha calidad, la Constitución permite la imposición de restricciones mayores a las creadas para los demás ciudadanos”. Así, dijo el organismo, es un deber de ellos “mantener un comportamiento ajustado al derecho y con respeto hacia la mujer”. No le es dable a un servidor público realizar conductas que atenten

contra los derechos que constitucionalmente se le ha encargado proteger. El Consejo de Estado dijo que el derecho disciplinario no exige, para que se configure una infracción disciplinaria, que la conducta desplegada por el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas genere un resultado, esto es, “cause daño al Estado”. Así, dice la corte, “bastaría con que el servidor público quebrante los deberes para que pueda afirmarse que se incurrió en un actuar disciplinable”. Para la alta corte, aunque las conductas realizadas por los servidores públicos en su ámbito personal no pueden ser analizadas bajo la lupa del derecho disciplinario, ya que no tienen relación directa con la prestación del servicio, el hecho de que tengan deberes funcionales hace que se deba hacer un análisis más estricto. Así, la conducta desplegada en otros ámbitos, incluso en el campo privado del sujeto, puede trascender a los deberes a su cargo y afectar la consecución de los fines del Estado y, en particular, de la entidad pública en la que realiza sus funciones. El fallo recuerda que según decisiones de la Corte Constitucional, los servidores públicos tienen cargas adicionales a las del resto de ciudadanos ya que son quienes representan al

Estado y deben velar por el bienestar general de la comunidad, por lo que sus actuaciones deben ser ejemplo para los demás. En el caso concreto, el Consejo de Estado insiste en que aunque los hechos hubieran sucedido fuera de la oficina, su conducta sí es disciplinable. Y añade que también violó sus obligaciones como servidor público de tratar a los demás con respeto. “No le es dable a un servidor público realizar conductas que atenten contra los derechos que constitucionalmente se le ha encargado proteger, como tampoco desconocer que uno de los principios fundantes del Estado social de derecho es precisamente el respeto de la dignidad humana, so pretexto de no encontrarse en su horario laboral ni en la sede de su oficina”, dice la decisión.

- **Tatequieto de la Corte Suprema a padres irresponsables que alegan no tener trabajo.** La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado para que no haya beneficios a padres que dicen que no tienen empleo, pero sí tienen propiedades a su nombre con las que pueden cumplir cuando enfrentan procesos por inasistencia alimentaria. El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal al conocer el caso de un

hombre condenado por inasistencia alimentaria, pero absuelto en segunda instancia bajo la figura de justa causa con el argumento de que no tenía un empleo para responder por la cuota a su hija. No obstante, la Corte encontró que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que el hombre tenía a su nombre tres propiedades con las que podía responder. Este hecho hizo que el alto tribunal considerara la conducta agravada porque si bien el patrimonio no es líquido, tampoco manifestó su intención de venderlo para cumplir con su obligación, hecho que indiscutiblemente debe ser tenido en cuenta por los jueces para emitir condenas por este delito cuando se trate de menores de edad. Para la Corte “quien tiene bienes inmuebles es porque tiene capacidad económica para adquirirlos” así demuestre que no tiene un empleo para responder por sus obligaciones.

Chile (El Mercurio):

- **Corte Suprema condena a padres de menor que publicó fotos íntimas de adolescente en redes sociales.** La Corte Suprema condenó a los padres de un menor que divulgó imágenes íntimas de joven en redes sociales, a pagar una

indemnización total de \$3.000.000 a la víctima y sus progenitores. En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal estableció la responsabilidad de los padres demandados por la falta de vigilancia respecto del actuar negligente y culpable de su hijo. El fallo sostiene que "tal hecho constituye un atentado al deber de no causar daño que consagra nuestro ordenamiento jurídico sobre el cual se construye el sistema de la responsabilidad, por parte del hijo de los demandados, quien no debió divulgar, hacer circular de ninguna forma tales fotografías o permitir que ocurriera pues fueron tomadas en el contexto de una relación íntima y privada y que por su naturaleza no estaban destinadas sino que a mantenerse en ese contexto, siendo absolutamente previsible y lógico que su divulgación a través de las redes sociales afectaría a la involucrada, al verse expuesta a una vejación pública de esta índole, considerando por lo demás su corta edad, 14 años". La resolución agrega que "lo anterior permite tener por configurado el primer presupuesto de la responsabilidad invocada, esto es, la existencia de un actuar negligente y culpable del hijo de los demandados, no siendo impedimento para ello la falta de una condena

en sede criminal, porque como lo ha dicho esta Corte en reiteradas oportunidades, la responsabilidad civil es distinta de la penal, sustentándose la primera en parámetros y estándares distintos, a la segunda". Además dice que "conforme a lo señalado, continúa, queda claro que las hipótesis que presentan los artículos 2320 y 2321 del Código Civil, para hacer responsables a los padres de los hechos que causan daño cometidos por sus hijos, atienden a presupuestos distintos". Y añade: "por una parte, la norma del artículo 2320 responde a la hipótesis en que el hijo menor de edad viva en casa del padre, permitiendo exonerarse de responsabilidad a éste en caso que no hubiere podido impedir el hecho. Se trata de una norma basada en la trasgresión del deber de vigilancia o cuidado que todo padre o madre debe tener respecto de sus hijos que viven en su casa, hasta que no cumplan la mayoría de edad". "En cambio, la norma prescrita en el artículo 2321 es mucho más extensa, porque no tiene limitación temporal, cuando el delito cometido por los hijos menores proviene 'conocidamente' de la mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir", señaló.

Estados Unidos (AP/Univisión):

- **Trump nomina a Brett Kavanaugh para la Suprema Corte.** Después de días de intenso cabildeo y conjeturas, el presidente Donald Trump nominó el lunes al juez federal de apelaciones Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, lo que prepara el escenario para una dura batalla con los demócratas por el intento del mandatario de virar aún más a la derecha al máximo tribunal de la nación. Trump escogió a Kavanaugh para que sustituya al justice Anthony Kennedy, quien se retirará pronto. Con las acostumbradas fanfarrias, Trump preparó su anuncio para la hora estelar de la televisión. Todas sus opciones finales fueron jueces federales jóvenes que podrían ayudar a reconfigurar la corte en las próximas décadas con fallos que cambien los precedentes en temas como el aborto, las armas y la atención médica. Saboreando el suspenso del nombramiento, Trump fue parco sobre su decisión con la prensa antes del anuncio. Algunos conservadores manifestaron sus preocupaciones sobre Kavanaugh —un juez de carrera y exsecretario de Kennedy—, de quien

cuestionaron su compromiso con temas sociales como el aborto y destacaron que el tiempo que sirvió durante el presidente George W. Bush evidenciaba que sería más una elección de centro. Sin embargo, sus simpatizantes señalaron su experiencia y amplia gama de opiniones jurídicas. Debido a la decidida oposición de los demócratas a la decisión de Trump, la batalla de confirmación en el Senado previsiblemente durará meses hasta las elecciones de medio periodo de noviembre.

EL PROCESO

1 Nominación del candidato

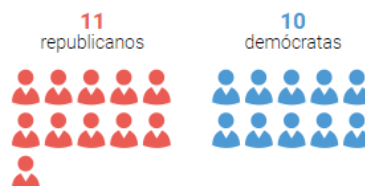


El presidente Trump propone a **Brett M. Kavanaugh** para ocupar la vacante en la Corte Suprema que dejó el juez Kennedy después de retirarse.

2 Comité Judicial del Senado

Este comité investiga los antecedentes del candidato, al que luego somete a una audiencia. Por último, **recomienda o desaconseja la candidatura**.

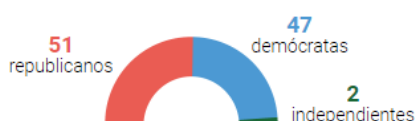
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ JUDICIAL



3 Votación en el Senado

Una mayoría simple (51 senadores) permite aprobar la candidatura.

COMPOSICIÓN DEL SENADO



EL CANDIDATO



BRETT M. KAVANAUGH

Nacido en febrero de 1965 en Washington DC.

Kavanaugh es graduado de la Universidad Yale. **Desde 2006 ha sido juez en el Circuito del Distrito de Columbia.** George W. Bush lo nominó para ese puesto.

Postura de Kavanaugh ante:

ABORTO

En 2017, se opuso a una sentencia que permitía a una menor indocumentada **salir del centro donde estaba retenida para abortar.**

LIBERTAD RELIGIOSA

Ha defendido el ejercicio de la libertad religiosa en corte. Ha escrito, pro bono, opiniones ante la Corte Suprema en defensa de organizaciones religiosas.

PODER PRESIDENCIAL

Cree que **un presidente tiene que estar protegido ante una demanda civil o criminal**, para poder "servir al interés público" sin distracciones.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

No considera que la Agencia Nacional de Seguridad vulnerase la constitución **cuando vigiló electrónicamente a ciudadanos de EEUU.**

- **Juez deniega petición de detener juntas a familias migrantes.** Una jueza federal de Los Ángeles rechazó el lunes una petición del gobierno de Donald Trump de mantener detenidas juntas a las familias de inmigrantes, y describió la solicitud como un intento "cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial. La jueza de distrito Dolly Gee dijo que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal. El Departamento de Justicia

pidió a Gee alterar el acuerdo de 1997 después que el presidente dio marcha atrás a su política de tolerancia cero que causó indignación en todo el mundo tras la publicación de videos en los que se veía como los pequeños eran separados de sus padres. El gobierno quiere cambiar el acuerdo para poder mantener a las familias juntas detenidas a largo plazo. Gee calificó la petición de un “intento cínico” de endosar a la corte la responsabilidad por “20 años de inacción del Congreso y de acciones ejecutivas irreflexivas que han llevado al estancamiento actual”. El gobierno intentó alcanzar “el mismo territorio familiar” que hace tres años cuando rechazó un esfuerzo similar del gobierno del expresidente Barack Obama, apuntó Gee. La solicitud para alterar el acuerdo en un caso que tomó el nombre de su principal demandante, Jenny Flores, fue “procesalmente impropia y completamente inmerecida”. El Departamento de Justicia estaba estudiando el fallo y no dijo si lo recurrirá. “No estamos de acuerdo con el veredicto de la corte declinando enmendar el Acuerdo Flores para reconocer la crisis actual de familias que realizan el peligroso e ilegal viaje a través de nuestra frontera sur”, explicó el vocero del departamento, Devin

O'Malley, en un comunicado. Los menores pueden ser detenidos junto a sus padres si estos rechazan dejarlos en libertad bajo la custodia de un familiar. El abogado Peter Schey, que representó a los niños detenidos en el caso, apuntó que Donald Trump afirmó de forma falsa que el acuerdo exige la separación de las familias. "Examinando la falsa narrativa del gobierno, la corte determinó claramente que el Acuerdo Flores nunca ha resultado en la separación de las familias", dijo Schey. "El presidente Trump debe asumir las responsabilidad de sus propias políticas erróneas".

Unión Europea (El País):

- **Los testigos de Jehová deberán pedir permiso cuando recojan datos puerta a puerta.** Los testigos de Jehová deberán informar a los ciudadanos con los que tratan de los datos que han recogido sobre ellos y pedirles su consentimiento para guardarlos y utilizarlos. Así lo ha decidido este martes una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los jueces comunitarios creen que la información que almacenan los miembros de esta comunidad

religiosa, como cualquier otra, no debe quedar exenta de cumplir la norma de protección de datos europea, y la forma de obtenerla ha de ajustarse a las reglas. Cuando un usuario completa un formulario para unirse a una red social a través de Internet, marca una casilla en la que, si así lo desea, cede voluntariamente su información personal. Hasta ahora, eso no sucedía cuando predicadores de los testigos de Jehová, en su recorrido casa por casa, tomaban notas de sus entrevistas. En ellas constan, muchas veces sin conocimiento de sus interlocutores, datos como el nombre y la dirección, u otros especialmente sensibles como la situación familiar o la religión del inquilino de la casa. La justicia europea, preguntada al respecto por un tribunal finlandés, ha dictaminado que deberán adaptar su forma de organizarse para conseguir adeptos. "Una comunidad religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento de los datos personales efectuado por estos últimos en una actividad de predicación puerta a puerta", explica el fallo. El artículo 9 del reglamento europeo de protección de datos (RGPD) estipula que las organizaciones y empresas no pueden tratar información

personal en la que se incluya la raza, opiniones políticas, convicciones religiosas u orientaciones sexuales, pero establece como única excepción que el interesado dé su consentimiento explícito, una petición de permiso que no es habitual en la actividad de los testigos de Jehová. "El RGPD se aplica con independencia de que los datos se capten en el entorno físico o en internet. Hay que dejar muy claro que su protección afecta al honor y a la intimidad de las personas y que se basa en su consentimiento, especialmente en el caso de los datos más protegidos, como son los relativos a creencias religiosas", aclara el experto en derecho digital Borja Adsuar. En la práctica, la sentencia les obliga, en primer lugar, a que expliquen a los ciudadanos con los que conversen qué información van a almacenar, y a continuación, a que autoricen su uso. También a extremar la precaución sobre las personas que tienen acceso a la misma. Los magistrados estiman que no es relevante si están anotados a bolígrafo o forman parte de un archivo de Excel. "El concepto de fichero comprende datos personales recogidos durante una actividad de predicación puerta a puerta que incluyan nombres, direcciones y otra información relativa

a las personas visitadas, siempre que los datos estén estructurados según criterios determinados que permitan, en la práctica, recuperarlos fácilmente para su utilización posterior". Todo hace indicar que la obligación fijada por el tribunal dificultará la recogida de datos por parte de los testigos de Jehová, dado que se enfrentarán a eventuales reticencias de las personas con las que se entrevistan. Si bien el cambio en la forma en que hasta ahora obtienen y almacenan los datos dependerá también del celo que muestren las autoridades para comprobar que se cumple con las normas. La protección de los datos se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea en los últimos tiempos. El uso de información personal por parte de multinacionales tecnológicas aparece como una de las grandes líneas de negocio presentes y futuras para compañías como Google, Facebook o Amazon, pero en paralelo al rentable manejo de los datos ha crecido la preocupación sobre sus movimientos sin autorización, sobre todo desde el escándalo de Cambridge Analytica. Ante esa tesitura, la UE ha puesto en marcha la norma más garantista

del mundo con la información privada, en vigor desde el pasado 25 de mayo.

España (El País/EP):

- **Llarena cierra el sumario del ‘procés’ y suspende como diputados a Puigdemont y Junqueras.** El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado la conclusión de la investigación abierta sobre el procés, ha declarado la rebeldía de los procesados fugados y ha ordenado suspender de funciones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados procesados por rebelión y que están en prisión (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez). En el auto que explica la suspensión de los diputados, Llarena deja en manos del Parlament la posibilidad de que los parlamentarios suspendidos sean sustituidos temporalmente por otros de sus respectivas candidaturas. La suspensión no se aplica al exconsejero Antoni Comin al aceptar el juez su pretensión de recurrir en reforma el auto de procesamiento. A partir de ahora Llarena pierde la competencia sobre la causa que ha quedado concluida y que pasa a la Sala de enjuiciamiento. La resolución de Llarena

suspendiendo a la cúpula del procés responde la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional. En un auto notificado este martes, Llarena defiende la aplicación de este artículo como una medida cautelar “de naturaleza pública y extraordinaria” que persigue preservar el orden constitucional “impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad”. El juez va a comunicar la suspensión "automática" de los seis diputados a la Mesa del Parlament, a la que insta a "adoptar las medidas precisas" para ejecutar esta resolución. Llarena recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con una condena por inhabilitación, el artículo 384 bis contempla solo una medida de eficacia

provisional. El juez explica que la suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otro delito que no sea la rebelión o si se revoca la prisión provisional y salen en libertad y, por ello, considera que los diputados ahora suspendidos no tienen por qué renunciar de manera definitiva a su escaño para que sus grupos parlamentarios se aseguren la mayoría en la Cámara, sino que existe la posibilidad de que pueden ser sustituidos por otros diputados de forma temporal. El auto de Llarena incluye la suspensión de Puigdemont pese a que la justicia de Alemania le ha dejado en libertad provisional mientras decide si le extradita o no a España. Llarena, sin embargo, defiende que tiene decretada la prisión preventiva en España, que es el requisito que se exige para aplicar la suspensión automática, según la interpretación que hace el Supremo del artículo 384 bis de la Lecrim. El juez no ha suspendido de momento a Toni Comín, también procesado por rebelión y huído en Bélgica, porque ha aceptado su petición (y la de la exconsejera Meritxell Serret) de poder recurrir el auto de procesamiento ya que no se les había notificado hasta el pasado 5 de junio. En el mismo auto, el instructor de la causa abierta en octubre pasado en el Supremo

contra los líderes del procés da por concluida la causa, lo que implica que, a partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto a los investigados. La conclusión afecta solo a los procesados que se encuentran en España a disposición del juez. Respecto a los que están huidos (Puigdemont, Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel), el juez ha acordado en otro auto declararlos en rebeldía y, en aplicación del artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a éstos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez instructor.

- **El Tribunal Supremo reconoce legalmente que el uso de las pantallas digitales perjudica la salud ocular.** Cientos de millones de trabajadores que utilizan pantallas en su jornada laboral están en riesgo, aunque la mayoría no lo sabe. El Tribunal Supremo ha reconocido legalmente que el uso de las pantallas digitales perjudica la salud ocular, al sentenciar que el desprendimiento de retina sufrido por una administrativa delante de su pantalla de ordenador es un accidente laboral porque es una lesión producida en lugar y

tiempo de trabajo. Se trata de una sentencia que, tal y como han informado desde la Universidad Complutense de Madrid, anula la anterior dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declaró que su incapacidad temporal derivaba de una enfermedad común. Cientos de millones de trabajadores que utilizan pantallas durante la mayor parte de su jornada laboral están en riesgo, aunque la mayoría no lo sabe. De hecho, en 2015. The Vision Council reconocía que el 72 por ciento de la población desconocía los peligros asociados a la luz de alta energía o luz azul. El desprendimiento de retina se produce cuando ésta se desgarrar dentro del ojo y el líquido que existe en la cavidad vítrea traspasa la retina. Es una afección muy grave y repentina que puede acabar con daños permanentes para la visión del afectado. La mayoría de afectados suele ver destellos luminosos, formas irregulares flotando, pérdida de visión y visión borrosa que aparece de forma abrupta. No obstante, existen otras graves dolencias retinianas, como por ejemplo, la degeneración macular, que son acumulativas y donde el afectado no suele ser consciente hasta que es demasiado tarde. Si bien el desprendimiento de

retina puede intervenirse quirúrgicamente si esta se daña gravemente no existe curación posible. A pesar de estas cifras, sólo uno de cada 200 trabajadores protege la retina con medios científicamente probados de los efectos de la luz que emiten las pantallas, lo que significa que todavía millones de personas de todo el mundo carecen de la protección necesaria pese a que se vean obligados a trabajar delante de ellas. "Cada día aparecen nuevos casos de personas con serios efectos provocados por las pantallas y el hecho de que la sentencia del Tribunal Supremo reconozca que el desprendimiento de retina sufrido por una administrativa delante de su pantalla de ordenador sea considerado como accidente laboral (suceso) y no proceso, hace que se reconozca una realidad con la que convivimos pero que desgraciadamente se desconocía", han dicho desde la universidad madrileña. Por ello, el CEO de Reticare ha destacado la necesidad de abrir un debate antes de que sea "demasiado tarde", con el fin de adecuar el uso de la tecnología con las limitaciones del cuerpo y mente. "A los que conocemos los efectos nos sorprende la poca atención que prestamos a nuestros ojos, especialmente

cuando los riesgos que corremos son de daños acumulativos, irreversibles, permanentes e incurables", ha enfatizado.

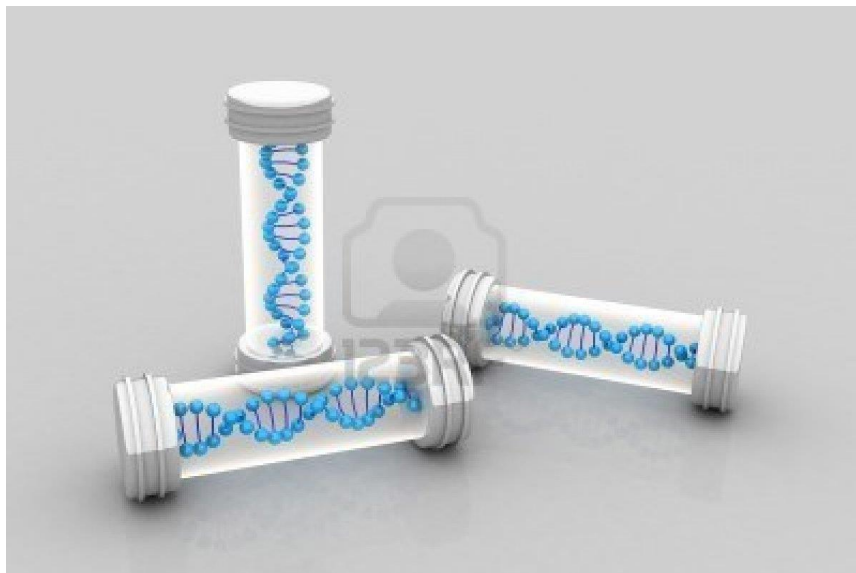
De nuestros archivos:

4 de junio de 2013
Estados Unidos (AP)

- **La Suprema Corte admite tomar ADN a arrestados.** La Corte Suprema de Estados Unidos, aunque muy dividida, informó el lunes que la Policía puede extraer rutinariamente ADN de las personas que arrestan y equipararon ese procedimiento a otros procesos comunes en esos casos, como la impresión de huellas dactilares. "Extraer y analizar una muestra de ADN del arrestado es, al igual que la toma de huellas dactilares y fotografías, un procedimiento policial legítimo razonable según la Cuarta Enmienda (constitucional)", escribió el Anthony Kennedy en nombre de la mayoría de cinco Ministros. Sin embargo, los cuatro jueces que disintieron dijeron que el tribunal estaba permitiendo un cambio importante en las prerrogativas policiales. "Esto está claro: a causa de la decisión de hoy, tu ADN puede ser extraído e incorporado a una base de datos

nacional si eres arrestado, con o sin razón y por cualquier motivo", dijo el juez conservador Antonin Scalia en la opinión contraria que leyó en voz alta en el tribunal. "Esto solucionará algunos delitos más, con seguridad, pero también lo haría si te extraen ADN cuando vuelas en un avión. Por cierto, la Autoridad de Seguridad en el Transporte debe saber la 'identidad' del público que vuela, pero con la misma idea se podría hacer que les extrajeran muestras de ADN a vuestros hijos cuando empiezan la escuela pública", agregó. Veintiocho estados y el gobierno federal toman ahora muestras de ADN después de un arresto, pero un tribunal de Maryland fue uno de los primeros en afirmar que era ilegal para ese estado extraer el ADN de un sujeto, Alonzo King, sin aprobación de un juez, aduciendo que King tenía "una expectativa suficientemente razonable de privacidad contra inspecciones infundadas" según la Cuarta Enmienda. No obstante, la decisión del máximo tribunal revierte ese fallo y repone la condena de King por violación, que se produjo después que la Policía tomó una muestra de su ADN durante un arresto por otros motivos. Kennedy escribió la decisión y se sumaron el presidente del tribunal

John Roberts y los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Stephen Breyer. Votaron con Scalia los jueces Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. La ley sobre ADN de Maryland solo permite que la Policía extraiga muestras de los arrestados por delitos graves como asesinato, violación, agresión, hurto y otros delitos de violencia. En su fallo, Kennedy no aclaró si la decisión del tribunal limita el ADN solo para esos delitos, aunque notó que las leyes respectivas de otros estados difieren de la de Maryland. Tomar muestras de ADN de los delincuentes es común. Todos los 50 estados y el gobierno federal toman muestras de las mejillas de delincuentes para cotejarlos con bancos de datos federales y estatales, con anuencia del tribunal. La puja en la Corte Suprema versó acerca de si la toma de muestras de ADN puede producirse antes de la condena y sin que un juez libre una orden. Según documentos judiciales, el índice combinado del FBI o CODIS -un sistema coordinado de perfiles de ADN en bases de datos a nivel federal, estatal y local- contiene más de 10 millones de perfiles de delincuentes y 1.100.000 de arrestados.



“Extraer y analizar una muestra de ADN del arrestado es un procedimiento policial legítimo razonable según la Cuarta Enmienda”

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas
aanayah@mail.scjn.gob.mx

* El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.